

**Auto:** AI-087  
**Proceso:** Conflicto de competencia.  
**Demandante:** Centro Educativo Infantil Arlequin S.A.S  
**Demandados:** Natalia Múnera Londoño  
**Radicado:** 05001 22 03 003 2023 00323 00  
**Mag. Ponente:** Julián Valencia Castaño  
**Asunto:** Dirime conflicto de competencia entre los Juzgados de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Itagüí y Primero Civil Municipal de Oralidad de Envigado.  
**Sinopsis:** Teniendo en claro los fundamentos fácticos y jurídicos llamados a gobernar la resolución del presente asunto, emergen valiosas conclusiones, a saber: (i) Que, en efecto, es posible predicar un fuero concurrente entre el domicilio del demandado (fuero general) y el lugar de cumplimiento de la obligación objeto de recaudo; (ii) Que del instrumento -título valor-, dimana la fijación del lugar de cumplimiento de la obligación, esto es Itagüí; (iii) Que el actor en el cuerpo de la demanda determinó la competencia en razón del cumplimiento de la obligación, (iv) que conforme a la jurisprudencia en cita el demandante puede escoger la circunscripción territorial en que habrá de ejercer su derecho de acción.

**TRIBUNAL SUPERIOR  
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN  
SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN**

Medellín, Doce (12) de Septiembre del dos mil Veintitrés (2023).

Concita la atención de la Sala dirimir el conflicto negativo de competencia suscitado entre los **Juzgados de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Itagüí y Primero Civil Municipal de Oralidad de Envigado** en torno a la asunción del conocimiento del proceso ejecutivo singular instaurado por Ana María Ramírez Ospina en contra del Centro Educativo Infantil Arlequin S.A.S.

**I. ANTECEDENTES.**

1. Por reparto correspondió al Juzgado Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Itagüí la demanda ejecutiva de la referencia, misma en la que, una vez efectuado el estudio de admisibilidad de rigor, devino en su rechazo, lo cual se materializó por auto del once (11) de mayo del año 2023, argumentado para ello: *“Estudiada la demanda, se constata que el lugar de domicilio de la parte demandada es la CALLE 36 SUR 45 03, dicha dirección se ubica en el Municipio de Envigado, barrio San Marcos, por lo que se concluye, sin lugar a equívocos que es evidente la carencia de competencia territorial, en virtud de lo establecido en el artículo 28 del Código General del Proceso”* en tal sentido, dispuso la remisión del asunto a los Juzgados de dicha municipalidad.

Una vez realizado el nuevo reparto, practicado en el municipio en cita, correspondió el asunto, en suerte, al Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad de Envigado, el cual tampoco admitió la competencia, y así lo declaró mediante auto del treinta y uno (31) de mayo del hogaño, pues, en su sentir: *Sea lo primero señalar que la Juez de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Itagüí invoca su falta de competencia conforme al numeral 1, artículo 28 del Código General del Proceso, argumentando que el domicilio del demandado queda ubicado en Envigado, barrio San Marcos, conforme a la dirección calle 36 sur 45 - 03; sin embargo, en el escrito de demanda, la parte actora indicó con claridad que el domicilio del demandado correspondía al municipio de Itagüí, pero el Despacho remitente optó por tener en cuenta que la dirección de notificaciones reportada debía relacionarse con el domicilio del demandado, tomando la decisión de remitir las diligencias a esta municipalidad*".

Visto lo anterior, procede la Sala a decidir la controversia, previas las siguientes,

## II. CONSIDERACIONES.

1. El Estatuto Procesal Civil establece los denominados "factores de competencia" como manera de determinar el juez natural del proceso. Entre estos, se encuentra el territorial, que comprende el "fuero" general o personal, el real, y el contractual. La coincidencia de al menos dos estos fueros, origina el denominado fuero concurrente, el cual deviene en un resultado subsidiario, lo que ocasiona necesariamente, que la competencia del Juez pase a ser determinada a elección del demandante; como sucede en los procesos originarios contra personas jurídicas, caso en el cual, el demandante tendrá la opción de presentar la demanda en el lugar del domicilio del demandado o en el de las sucursales o agencias, concurrencias que es predicable, a condición de que los hechos genitores de la acción, se encuentren vinculados a aquellas.

Uno de esos factores resulta ser el territorial, para lo cual la ley procesal se asiste de los denominados fueros o foros: personal, real y contractual. El primero de los fueros, el personal o conocido por la doctrina como general, atiende al lugar del domicilio del demandado "*actor sequitur forum rei*", previsto en nuestro estatuto procesal -C.G.P.-, en su art. 28, numeral 1º. Este *forum domicilii rei* o domicilio del demandado, es el foro establecido como regla general para

fijar la competencia por el factor territorial, a menos que exista un fuero especial, que lo releve.

2. Ahora, tratándose de la acción ejecutiva y, en observancia de la disciplina legal imperante en la materia, puede concluirse que tal aptitud jurisdiccional se radica, de manera concurrente, en el juez del domicilio del demandado o en el del lugar de cumplimiento de la obligación, veamos:

*“ARTÍCULO 28. COMPETENCIA TERRITORIAL. La competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas:*

*1. En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. **Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante.** Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el país o esta se desconozca, será competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante.*

*(...)*

*3. En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos **es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones.** La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita.”*

Así mismo, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, de antaño y de manera repetitiva, ratificada esta última vez en auto del treinta y uno (31) de agosto del dos mil veintiuno (2023), con ponencia del H. Magistrado, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Radicación No 11001-02-03-000-2023-03040-00, ha sostenido de manera invariable que la competencia se radica, a prevención, en el juzgador del domicilio del demandado o en el del lugar de cumplimiento de la obligación, veamos:

*2. El numeral 1° del artículo 28 del Código General del Proceso consagra como regla general de competencia el domicilio del demandado, con la precisión que, si este tiene varios domicilios, o son varios los enjuiciados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos, a elección del accionante, además de otras pautas para casos en que el convocado no tiene domicilio o residencia en el país. Al respecto la Sala ha manifestado que:*

*... como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aquél su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00).*

A su vez, el numeral 3° dispone que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones» (Subraya ajena).

Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domicilium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el respectivo acto (forum contractui).

Por eso doctrinó la Sala que el demandante, con fundamento en actos jurídicos de «alcance bilateral o en un título ejecutivo tiene la opción de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusión o título de ejecución debía cumplirse; pero, insístese, ello queda, en principio, a la determinación expresa de su promotor» (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00).

No obstante, en el evento en que este último factor de competencia territorial no se encuentre claramente definido en el texto del título valor materia de cobro, puede acudir complementariamente a lo consagrado en el penúltimo inciso del canon 621<sup>1</sup> del Código de Comercio, a cuyo tenor en aquellos casos en que «no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo será el del domicilio del creador del título; y si tuviera varios, entre ellos podrá elegir el tenedor, quien tendrá igualmente derecho de elección si el título señala varios lugares de cumplimiento o de ejercicio».

**2.2** Teniendo en claro los fundamentos fácticos y jurídicos llamados a gobernar la resolución del presente asunto, emergen valiosas conclusiones, a saber: (i) Que, en efecto, es posible predicar un fuero concurrente entre el domicilio del demandado (general) y el lugar de cumplimiento de la obligación objeto de recaudo; (ii) Que del instrumento -título valor-, dimana la fijación del lugar de cumplimiento de la obligación, esto es Itagüí; (iii) Que el actor en el cuerpo de la demanda determinó la competencia por el domicilio de las partes – Itagüí- (iv) lo que en consecuencia acredita que los únicos fueros concurrentes con fundamento en la línea jurisprudencial imperante en la materia, es que en los procesos que involucren título ejecutivo, son los previstos en los numerales 1 y 3 del artículo 28 del Código General del Proceso, tomando en consideración que la elección del actor no debe ser suplantada por el Juez.

En ese orden de ideas, dado que en el libelo introductor en referencia la parte demandante seleccionó el fuero general, al precisar enfáticamente que la competencia se fijaba en torno al domicilio de la

<sup>1</sup> Artículo 774 Código de Comercio. «La factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en los artículos [621](#) del presente Código...»:

demandada, el que a voces de lo previsto en el artículo 28 del C.G.P corresponde al municipio de Itagüí, no encuentra esta Corporación razón suficiente que justifique porqué el Juzgado de Pequeñas Causas se abstuvo de asumir el conocimiento del presente asunto, cuando dentro del plenario quedó plenamente acreditado el factor territorial que señaló el demandante y que no puede el juez modificar a mutuo propio.

*«(...) el receptor no puede salirse de los elementos delimitantes expuestos explícita o implícitamente en la demanda; además, de no estar clara su determinación, está en la obligación de requerir las precisiones necesarias para su esclarecimiento, de manera que se evite su repulsión sobre una base inexistente, propiciando un conflicto antes de tiempo» (CSJ AC1943-2019, 28 may.).*

Igualmente, vale la pena señalar que el suscrito Magistrado tampoco acompaña las razones que expuso la Juez en cita para separarse del conocimiento del asunto, por cuanto, en el libelo introductorio en ningún momento el demandante señaló que el domicilio de la demandada correspondía al municipio de envigado.

Finalmente es importante advertir que en múltiples providencias no sólo de esta Corporación sino también de la Corte Suprema de Justicia, así como de la doctrina especializada en derecho procesal civil, se ha reiterado constantemente que el Juez A quo no puede suponer que el domicilio del demandado es el mismo de la dirección aportada a efectos de notificación de la demanda, supuesto que en ocasiones si bien puede coincidir o no, ambos conceptos emanan significados diferentes que no pueden confundirse, pues el primero se corresponde con el asiento general de los negocios del convocado a juicio, mientras que el segundo, es aquel donde se puede conseguir al demandado con mayor facilidad para efectos de notificación y en esa medida no pueden otorgarse efectos o interpretaciones distintas a las previstas en la normativa adjetiva, sin perjuicio de que la parte pasiva del asunto pueda controvertir lo acaecido mediante los mecanismos de control del proceso y de defensa correspondientes.

En corolario, observado el caso en concreto y, con sujeción en la norma adjetiva que viene de citarse, además de las consideraciones que ha merecido el asunto, encuentra el Tribunal que, con prístina claridad, la

competencia para conocer de la controversia estudiada debe ser atribuida al Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Itagüí, lugar a donde se ordena enviar la demanda para lo de su cargo.

De esta manera, y por las razones expuestas, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN,**

### III. RESUELVE

**PRIMERO:** DIRIMIR el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad de Envigado y el Juzgado Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Itagüí, indicando que el competente para conocer de este proceso es el segundo de los nombrados.

**SEGUNDO:** REMITIR el expediente al Juzgado Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Itagüí, para que asuma la competencia del asunto.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**



**JULIÁN VALENCIA CASTAÑO**  
**MAGISTRADO**